

Cuadernos del

CES

7

Hugo Zemelman

**El proceso chileno de
transformación y los
problemas de dirección
política (1970-1973)**

Centro de Estudios Sociológicos

EL COLEGIO DE MEXICO

Cuadernos del CES - Número 7

**El proceso chileno de transformación y los problemas de
dirección política (1970-1973), por Hugo Zemelman**

**Centro de Estudios Sociológicos
El Colegio de México**

Precio: \$ 5.00 M.N.

Dls. 0.50

Prohibida la reproducción parcial o
total sin el permiso correspondiente

El Colegio de México
Departamento de Publicaciones
Guanajuato 125
México 7, D. F.

Impreso y hecho en México
Printed and made in Mexico

Derechos reservados conforme a la ley
c 1974, EL COLEGIO DE MEXICO

A D V E R T E N C I A

El trabajo que se presenta incluye algunas reflexiones teóricas de orden general que nos ha planteado el examen concreto del proceso chileno (1970-1973).

Para facilitar su lectura debemos decir que el análisis se orienta a destacar los errores de dirección cometidos por la Unidad Popular, que, en una medida importante, contribuyeron a acelerar el fracaso de dicha experiencia social y política.

Las reflexiones son notas para un trabajo en desarrollo cuyo tema fundamental es analizar la viabilidad histórica de la llamada "vía chilena al socialismo." Sin pretender adelantar precipitadamente conclusiones, podemos decir que la premisa en que descansan las presentes notas apunta a la idea de que dicha vía era posible de impulsarse, o, desde otro ángulo, que el fracaso era evitable.

No obstante, la respuesta definitiva solamente podrá tenerse, debidamente fundamentada, después del examen minucioso del material.

EL PROCESO CHILENO DE TRANSFORMACION Y LOS PROBLEMAS DE

DIRECCION POLITICA (1970-1973)

Por Hugo Zemelman

OBJETIVOS

La elaboración de un trabajo de interpretación de un proceso social puede orientarse indistintamente a procurar una explicación de un conjunto de hechos concatenados, o tratar de derivar del conjunto secuencial de los mismos, los temas teóricamente más significativos. Esta segunda perspectiva tiene la validez de buscar un entronque entre las afirmaciones más generales de la teoría con la experiencia concreta de un proceso histórico determinado, y en consecuencia, apreciar el enriquecimiento de que el estudio concreto es capaz de producir al nivel de las categorías más generales.

Nuestro propósito con el presente artículo es tratar algunos de los problemas teóricos involucrados en el proceso de transformaciones que protagonizó Chile durante tres años (1970-1973).

Aunque no podemos desconocer los hechos particulares que se han tomado en consideración, el acento estará puesto en cómo la realidad puso de manifiesto problemas de orden teórico. En este intento tampoco podemos

ignorar la lucha permanente entablada entre el análisis realizado a partir de premisas valóricas, a priori, y el que pretende encontrar la realidad objetiva mediante el empleo de un razonamiento dialéctico, sin sujeción a paradigma explicativo alguno. Por ahora no podremos detenernos en el examen de la lógica interna (de las diferentes formas de hacer el análisis concreto) pues deberá ser objeto de un estudio separado.

I. DESCRIPCION DE LA SITUACION.

Una breve recapitulación de los hechos de mayor relevancia servirá para encuadrar las reflexiones que siguen.

La combinación de fuerzas agrupadas en la Unidad Popular triunfa en las elecciones presidenciales de Septiembre de 1970 por un poco más del tercio del electorado, derrotando a los dos candidatos que la burguesía presentó incapaz de encontrar un candidato común.

La división de la burguesía era una consecuencia de las profundas fracturas que experimentó su bloque de poder después de que una fracción de esta, impulsa un programa de orientación populista que afecta principalmente los intereses agrícolas. La Reforma Agraria iniciada por

el Gobierno Demócrata-Cristiano de Frei produjo, en efecto, un quiebre que se proyectó hasta las elecciones presidenciales de 1970. Las exigencias populistas desarrolladas durante dicha administración, al expresar el interés de la burguesía por fortalecer su dominio mediante la inclusión en el sistema de dominación de nuevas fuerzas sociales, marcaron un rumbo a la burguesía por vigorizar sus alianzas al costo de sacrificar algunos de sus intereses, lo que intensificó la separación entre una fracción político populista, representada en la D.C., y la fracción oligárquico-monopolista expresando los intereses estrictamente empresariales, latifundarios y financieros.

La burguesía surge dividida en una fracción oligárquico-monopolista y una fracción político-populista. Es un producto del mismo desarrollo histórico que la burguesía se fraccione en diferentes planos de la realidad, lo que explica que las diferentes fracciones no representen lo mismo. En realidad uno de los rasgos dominantes del sistema de dominación democrático-liberal, que rige en Chile sin interrupciones desde la década de los treinta, es la delegación de poder que creó las condiciones para que la representación política de los intereses de clases se desarrollara rápidamente en una "clase política" que entra a cumplir funciones de liderazgo de la burguesía considerada en bloque. Por lo general está constituida esta "clase política" por capas sociales ambiva-

lentes que sirven tanto de instrumento de las varias fracciones de la burguesía, como de nexo con otras fuerzas populares antagónicas que pugnan por participar en los beneficios del Sistema Capitalista (tales como la clase obrera, campesinado, y sectores medios excluidos del poder).

Esta clase política demuestra cierta capacidad de autonomía respecto del resto de la clase en la medida que su interés es afianzarse en la conservación de la superestructura institucional que caracteriza al Estado desarrollista. En efecto, a medida que la burguesía acentúa su dependencia del Estado para poder sostener el proceso de acumulación, se incrementa la posición de poder de esta fracción de la burguesía llegando a establecer relaciones contradictorias con otras fracciones identificadas más claramente con determinados intereses. La reforma agraria impulsada por la democracia cristiana es un buen ejemplo de esta contradicción.

Constituida la fracción política populista por capas sociales provenientes de distintos estratos, ubicados ya sea en el aparato del Estado, o bien vinculados a la infraestructura creada por la burguesía monopolista y no monopolista, es posible diferenciar internamente estratos según el nivel de funcionamiento de la superestructura institucional. Así es cómo se pueden diferenciar los estratos propios de la administración del Estado, los

de la estructura burocrática de la empresa, o los que son parte de los poderes institucionalizados (tales como jueces, parlamentarios, regidores, militares), o bien las organizaciones profesionales y técnicos, etc. Todas estas capas están en condiciones de aceptar cambios, especialmente consistentes con una determinada forma y profundidad de la intervención del Estado en la economía, pero conservando intacta la superestructura jurídica institucional.

La fracción político -populista reviste un carácter político por la esfera en que define sus condiciones de existencia, mientras que el de populista está dado por representar la fuerza clave para mantener la dominación burguesa demo-liberal mediante la política de concesiones y alianzas entre fuerzas sociales. Por eso es que pueden en un primer momento sentirse identificados con sus planteamientos los grupos empresariales más dinámicos y modernos, aquellos que están dispuestos a imponer una política de alianza como paliativo a las tensiones sociales crecientes derivadas de la estructura económica oligárquica-monopolista.

La inclinación populista de la fracción llega a inspirar planeamientos ideológicos que, como la vía no capitalista para el desarrollo, planteado por la D.C., en los años 1967 y siguientes, contribuye a debilitar su autoridad sobre el conjunto de la burguesía. En efecto,

no podía continuar representando una garantía para ésta como tampoco entablar alianzas políticas e ideológicas con sus demás fracciones, ya que ello implicaba abandonar su política de remozamiento del sistema de dominación mediante una mayor apertura hacia las fuerzas populares que presionaban. Lo dicho se tradujo en la imposición de la candidatura de Lomic dentro del Partido Dem. Cristiano.

Con el ascenso al poder de la Democracia Cristiana se había alcanzado el límite para que la burguesía pudiera conservar su hegemonía como clase mediante el expediente de ampliar sus alianzas. Se entraba en la coyuntura en que los mecanismos de conservación del sistema de dominación demo-liberal se habían convertido en sus factores de rompimiento, como había quedado demostrado con la victoria de las fuerzas populares en Septiembre de 1970; hecho facilitado por el fraccionamiento de la burguesía como resultado de la política impulsada por la D.C.

El triunfo de las fuerzas populares se encuadraba, por consiguiente, en un contexto de correlaciones de fuerzas favorables si se atendía a dicha división en el campo de la burguesía, pero siempre y cuando se mantuviera sin dar lugar a ninguna iniciativa de reagrupamiento de la clase.

La fracción populista tenía disposición para

aceptar un esquema de co-participación en la promoción de algunos cambios, lo que no era sino la proyección de su propio esquema de transformaciones iniciado durante el Gobierno de Frei. Pero el movimiento popular, por su lado, apreciaba la naturaleza favorable de la correlación de fuerzas como un mero reflejo de su conquista del Gobierno menospreciando tal división, pues se partía del supuesto de que bastaba el ejercicio del poder político para liquidar a la burguesía mediante la destrucción de su base económica, sin considerar que la política de ampliación de la base de sustentación del Gobierno Popular, hasta rendir sus frutos, llevaba un tiempo que, si se enfrentaba con olvido de lo que correlativamente habría de ocurrir en el campo de la burguesía, podía servir para que ésta procediera a reagruparse.

Entre las opciones que se le presentaban a las fuerzas populares estaban la de utilizar la división ya existente en el seno de la burguesía, pero ello no ocurrió. El temor de que una alianza con una fracción de la burguesía representara un retroceso predominó sobre la ventaja que significaba en cuanto a tiempo para reorganizar la estructura del poder. Más patente se hace este error cuando objetivamente era posible recorrer toda una larga etapa durante la cual se podría haber avanzado en modificaciones fundamentales de la estructura institucional, en base a la propia crítica propugnada

por la fracción político-populista.

La falta de capacidad del movimiento popular para entender la necesidad de alianzas tácticas determinan, ya desde los comienzos del proceso, que se facilitara el reagrupamiento de la burguesía en torno de la fracción oligárquica-monoplista, aunque ello demoró todavía bastante (por lo menos todo el año 1971); pero que ante la falta de realismo en la evaluación de la tendencia en la correlación de fuerzas rápidamente fue conduciendo al gobierno a un callejón sin salida.

La falla fundamental consistió en evaluar la ampliación de la base social de sustentación del Gobierno sin que se considerara que simultáneamente se produciría un reagrupamiento en el campo de la burguesía; especialmente si consideramos que el carácter de la ofensiva, restringida al campo de lo económico, pero sin proyección al plano de lo ideológico, determinaría el resurgimiento de la alianza ideológica monopolizada por la fracción oligárquico-monopolista.

Hegemonía que le había sido cuestionada por la experiencia populista de la D.C., pero que sería la propia U.P. quien se la restablecería por no comprender el contenido de una política de alianzas con la fracción política populista. El reestablecimiento de dicha alianza

ideológica constituyó precisamente el nudo de la estrategia impulsada por la fracción más reaccionaria durante los tres años del Gobierno Popular.

En el curso de 1971 la D.C. hizo repetidos intentos por llegar a acuerdos con el Gobierno a pesar de la tensa y decidida oposición del Partido Nacional. Sin embargo la operatoria diseñada por el Gobierno de proceder a implementar su política de cambios sin consultar con el Parlamento, impidió a la fracción político populista de la burguesía hacer uso de su influencia en los órganos de poder que controlaba en el aparato del Estado. Esta circunstancia objetivamente significaba su marginación de cualquier forma de coparticipación en la dirección del proceso; pero como, a la vez, no constituía este modus operandi una violación del orden institucional, toda vez que el Gobierno recurría a mecanismos legales sancionados por el propio orden burgués, resultaba que los cambios efectivamente se podían impulsar sin mediar compromisos programáticos, ni menos de carácter ideológico, quedando la burguesía sin recursos válidos con que defenderse. Se podía realmente iniciar a corto plazo los cambios sin alianzas, pero la alianza era necesaria para la consolidación misma del proceso, lo que suponía impedir que la burguesía se volviera a cohesionar en torno de su fracción oligárquico-monopolista. Este hecho no fue comprendido por la dirección política, la cual, más bien, se

dejó arrastrar por su voluntarismo.

La fracción populista de la burguesía rápidamente es neutralizada en su capacidad de anexar fuerzas sociales contradictorias por efecto de la vertiginosa polarización que se desarrolla entre las fuerzas sociales. Su neutralización es consecuencia, en primer lugar, de que los sectores empresariales representados en la Democracia Cristiana, que originariamente se habían identificado con su política de ampliación de la alianza dominante, pronto entran en conflicto con la política de expropiaciones impulsada por el Gobierno. Este conflicto se refleja en la pugna entre tomicistas y freistas, los cuales, éstos últimos, al representar más claramente los peligros de una alianza estratégica entre empresarios y fuerzas populares entran a controlar la situación y a desplazar a los sectores aliancistas de la burguesía, esto es, los tomicistas. Pero también contribuye a su neutralización el hecho de que la política de la U.P. frente a la parte de la clase obrera y sectores populares, en general, que encontraban su representación política en la Democracia Cristiana, se tiñó de un fuerte acento sectario, lo que en la práctica no hizo sino aglutinarlas en torno del Partido y restarlas como base de los dirigentes dispuestos a una política de alianza y que, a la vez, contrapesarían la inclinación de la Democracia Cristiana exclusivamente en función de los intereses de

su sector empresarial.

En efecto, el Gobierno al acelerar el ritmo de las expropiaciones de predios rústicos y de algunas industrias estratégicas (comenzando por las de recursos básicos y las textiles), conjuntamente con la impotencia de la fracción política populista para influir en la orientación del proceso, crea las condiciones para que la burguesía comience a precipitar su cohesión interna perdiendo rápidamente autoridad cualquier orientación de corte aliancista. Proceso que se acelera cuando el Gobierno comienza a perder imagen ante la opinión pública, lo que se hace palpable con su primera derrota electoral en las elecciones complementarias de un diputado por la provincia de Valparaíso, en el mes de julio de ese año; acontecimiento que contribuyó para que desde una fase de desconcierto y repliegue la burguesía pese a la ofensiva (que no perderá durante el resto del periodo) y que se corresponde con la gradual supeditación del Partido Demócrata Cristiano a las directivas del Partido Nacional.

Ante el comportamiento ambiguo y contradictorio del P.D.C. (producto de sus tensiones internas) el P.N. comienza a implementar una estrategia de ataque basada en la falta de representatividad del Gobierno para imponer un programa sin consulta previa con el Congreso. Esta línea de acción se orienta a destacar el punto de

antagonismo más profundo entre el Gobierno y la D.C. y que terminará por provocar una identidad casi orgánica entre ambas expresiones políticas de la burguesía. Paralelamente, comienza a promover movilizaciones que se proyectan en la constitución de frentes amplios de masa como fueron la defensa del Area Privada (que celebra en Diciembre de 1971 su primer acto público de masas en el coliseo cerrado más grande de Santiago), y los primeros desfiles de protesta protagonizados por mujeres. Ya en estos actos participaban tanto los dirigentes como la base demócrata-cristiana. En verdad fue a través de la constitución de los frentes femeninos como la extrema derecha pudo llegar a sumar a su política a la democracia-cristiana. Y ello comenzaba a plasmarse a fines de 1971.

1972 representó un notable progreso en la consolidación de la estrategia por estructurar un Frente Unido. A comienzos de año (mayo-junio) logra cristalizar en la constitución de un Frente (la denominada Confederación Democrática) tras vencer algunas reticencias demócrata-cristiano. No obstante que el frente se justifica en términos estrictamente electorales (ya que se estaba en vísperas de una elección extraordinaria en la provincia de Coquimbo) y que no involucraba compromisos programáticos profundos (tanto nacionales como demócrata-cristianos enfatizaban sus diferencias ideológicas y pragmáticas), constituía, de hecho, una definición de la clase

como bloque frente al Gobierno y reflejaba cada vez más claramente el sometimiento de la D.C. a los dictados estratégicos del Partido Nacional. Ello no era sino el fruto de la alianza entre los nacionales y el sector freista de la D.C. en su lucha, tanto por derrocar o neutralizar al gobierno establecido, como por imponer su liderazgo a la burguesía. Un solo hecho basta para ilustrar esta afirmación.

En julio de 1972 el Senado aprueba la reforma constitucional que delimitaba las tres áreas de la economía con los votos nacionales y de los senadores D.C. (en su mayoría afiliados a la tendencia de Frei). Y lo hace a pesar del acuerdo logrado poco antes entre el Gobierno y la Directiva Nacional del P.D.C., que, en ese momento, controlaba todavía la tendencia tomicista o aliancista. No obstante dicho acuerdo, los senadores D.C. se rebelan contra su propia Dirección y contribuyen a precipitar un acuerdo del Senado que es un eslabón decisivo en una larga cadena de acontecimientos que, a partir de ese momento, comienzan a precipitarse y cuyo objetivo final es provocar la crisis institucional. En efecto, el acuerdo logrado entre la directiva tomicista de la D.C., y el gobierno involucraba una plataforma de lucha parlamentaria que, de haber sido implementada oportunamente, habría dificultado sino impedido la constitución del Frente Unido. Y si no lo fue en gran medida se debió a la influencia que Frei ejercía sobre el partido.

La política de la Unidad Popular de ataques a su figura (inspirado en el propósito de provocar un despertar izquierdista de las bases demócratas-cristianas) produjeron el efecto de cohesionar al partido en torno de su figura, contribuyendo a desautorizar a los dirigentes tomicistas que buscaban el diálogo con el gobierno. Es una situación que ilustra sobre las intermediaciones que representan los grupos políticos en las polarizaciones sociales y que son determinantes para definir un correcto tratamiento de las bases populares afiliadas a un partido de la burguesía como era la O.C. Al no tener presente la U.P. en sus análisis dichas intermediaciones ayudó a vigorizar al grupo de presión, que, como tal, siempre funciona en base al reconocimiento de un líder fuerte. No se trataba tanto de atacar a un líder como de provocar sus contradicciones objetivas con su base popular mediante una política abierta, flexible y no sectaria. Pero al incurrir en el vicio del ideologismo y en el crimen del sectarismo la U.P. contribuyó a engrandecer la figura de Frei como elemento clave para la fusión de los distintos ejes políticos de la burguesía en un solo frente unido. Por eso es que los senadores demócratas cristianos pudieron fácilmente enfrentarse a su propio partido y sin ningún desmedro de sus posiciones partidarias trabajar estrechamente unidos con la extrema derecha. Tenían el respaldo de una considerable parte de las mismas bases de la Democracia Cristiana.

A partir de dicho acuerdo queda de facto cerrado el cerco institucional en torno del Gobierno. Sólo cabe recorrer un corto trecho antes de encontrarse la barrera infranqueable: el tiempo que llevaba agotar el trámite de la Reforma Constitucional que, de acuerdo con las disposiciones vigentes, era un plazo fijo y perentorio; barrera que sólo podía trasponer el gobierno de dos modos: a) o llegando a una transacción programática (que a medida que avanzaba el tiempo no sería ya definida por la fracción política populista, que había perdido su autonomía de decisiones, sino por la fracción oligárquico-monopolista, representada en el Partido Nacional); y b) o enfrentando una definición institucional a través de la creación de nuevas formas de poder, o mediante un plebiscito.

La dirección del movimiento popular no toma sin embargo ninguna decisión clara y oportuna, lo que da tiempo a la burguesía para diseñar una estrategia en base a los trastornos económicos y sociales inevitables que todo proceso de transformaciones lleva consigo. Estrategia que culmina con la crisis de octubre de ese mismo año en que la burguesía aparece transfiriendo su centro de decisiones desde los partidos a los gremios y en la que ya aparecen confundidos ambas expresiones políticas de la clase: la Democracia Cristiana y, el Partido Nacional.

Con la crisis de octubre la burguesía aparece

forzando su unidad como clase en base a su aglutinación en torno del poder de los gremios. Son estos los encargados de superar las discrepancias que las fracciones de la burguesía mantienen todavía en el plano de los partidos. El resultado es que la D.C. pierde prestigio en su zona de influencia incluyendo su propia base militante. Cada vez más se reduce a una estructura meramente formal cuyo poder efectivo pasa a ser detentado por el sector encabezado por Frei, en alianza estrecha con el Partido Nacional. Es así como se multiplican los indicadores que demuestran la creciente identidad entre los dos ejes políticos de la burguesía.

Pero el enfrentamiento de las elecciones parlamentarias de marzo de 1973 produjo una temporaria separación entre los ejes políticos. El Partido Nacional postula durante la campaña ganar los dos tercios del Congreso para promover un cambio de gobierno, a través de la acusación constitucional en contra del presidente. La D.C. se orienta más bien a ganar a la mayoría necesaria en el congreso para declarar en interdicción al gobierno, en cuanto a su capacidad para continuar implementando su programa por simples decretos de insistencia. Se trata de cuestionar su representatividad frente a un parlamento que surga con un respaldo de una mayoría estensible.

El éxito del gobierno (44% del electorado) derrumba ambas líneas de acción. Ya no es posible abatir

al gobierno mediante el recurso de la acusación constitucional (pues la burguesía no logra los dos tercios), ni tampoco hacer más efectivo al cerco institucional con el apoyo de un parlamento fuerte enfrentando a un poder ejecutivo derrotado. Es el momento en que la alianza Partido Nacional sector freista no tiene más alternativa que incitar al golpe de Estado con apoyo militar.

Pero también es el momento inexplicable en que un triunfo de esa naturaleza se queda en nada. En vez de emplear la U.P. dicho triunfo para ejercer una presión que, bajo la forma de una acción en el Congreso, hubiere contribuido a plantear en ese nuevo contexto de fuerzas un fraccionamiento, o, a lo menos, un debilitamiento de la alianza de la burguesía, optó por abrir nuevos frentes de lucha precisamente en aquellos planos que mejor se adecuaban para reforzar la alianza de la burguesía; esto es, en el plano de la ideología. Es el caso del proyecto de la escuela nacional unificada que por su excesivo carga principista sirvió para que la alianza nacional-freista nuevamente se impusiera a pesar de que la correlación de fuerzas era en ese momento desfavorable para su estrategia.

La dirección aliacista o tomicista de la burguesía se ve impedida de romper el bloqueo ideológico del anticomunismo en que la U.P. puso los términos de defi-

nición cuando, después de las elecciones, se preocupa de ampliar su ofensiva en vez de ejercer presión para provocar una división del bloque opositor. Se imponen acuerdos relativos a una nueva estructura institucional, (los cuales debían medirse, en lo que se refiere a su significación, según el criterio de que debían contribuir al forjamiento de nuevas formas de poder) pero sin considerar los intereses más apremiantes de una dirección aliada de la burguesía; lo que se traducía en defender y respetar a ciertas formas de consenso en el actuar político. Concretamente en plantear una alianza con las capas medias y su participación en las nuevas formas de poder que se gestaran.

Para ser efectivo el entendimiento debía imponerse en el momento mismo en que la correlación de fuerzas favorables al gobierno (por los resultados electorales) servía para desconcertar a la burguesía y cuestionar fuertemente la estrategia de la fracción oligárquico-monopolista. Después sería ya tarde una vez que hubiera logrado reconsolidar nuevamente su alianza ideológica.

Sin embargo, la línea de acción del gobierno (léase partidos populares) orientada a abrir nuevos frentes, basado en su fuerza electoral, implicaba rechazar dicho camino de alianzas como el correcto para avanzar

en esa coyuntura, se desconocía que avanzar podría reflejarse no tanto en continuar implementando nuevas medidas del programa de gobierno, como impedir que la alianza de la burguesía volviera a consolidarse.

No nos referimos a la necesidad de optar entre la consigna de avanzar sin trazar, o de consolidar para avanzar. Más bien de lo que se trataba (en esa coyuntura) era comprender las necesidades de una alianza con sectores medios, en vez de empujarlos a una alianza con la fracción oligárquico-monopolista. No podemos olvidar que el proyecto de reforma a la educación pública y privada sirvió para que se impulsara una campaña con activa participación de las bases demócrata-cristianas, principalmente dirigidas a disipar los efectos del éxito electoral del gobierno.

En lugar de utilizar la Unidad Popular tales resultados para profundizar en las medidas con una ofensiva ideológica cuyo objetivo fuera neutralizar a sectores medios y aislar, en consecuencia, a la oligarquía monopolista, se emprendió una línea de acción que provocó una mayor aglutinación del bloque de la burguesía limitando todavía más los escasos márgenes de acción para una dirección aliada de ésta.

La mejor demostración de lo que sostenemos se encuentra en los pasos siguientes impulsados por la

burguesía.

La aprobación de los últimos trámites de la Reforma Constitucional por el Partido Nacional y la D.C. (julio de 1973), determinó que la lucha de clases rompiera de hecho la estructura unitaria del Estado, ya que abrió los cauces para una pugna entre Poderes Públicos enfrentados en un impasse insoluble. La dualidad de poderes (Congreso, Corte Suprema y Contraloría General versus Poder Ejecutivo) que trajo consigo tal desarticulación del Estado, creó las condiciones para que ante la parálisis de los órganos de gobiernos se procurara transferir el poder de decisión a formas nuevas (cordones industriales, comandos comunales y otras formas). Organizaciones que, a pesar de constituir sólo embriones carentes de toda organicidad, encarnaban en cambio todo el terror ideológico manipulado por la burguesía y ante el cual no había ninguna respuesta prevista por el movimiento popular.

Efectivamente, la ofensiva impulsada por el movimiento popular de transferir poder ante el impasse producido se promueve más a nivel ideológico que organizativo, incapacitado de implementar materialmente sus decisiones en razón de la división en su dirección política.

La gravedad política que involucraba el dese-

quilibrio entre las proyecciones ideológicas de una decisión y el poco efectivo grado de concreción de la misma, se agudizaba todavía más cuando, en el caso de una ofensiva que atacaba frontalmente el sistema de dominación burgués, se impulsaba in atender el comportamiento de las FF.AA. De una manera u otra éstas siempre fueron enfocadas por la U.P. desde una perspectiva de análisis de clase muy simplista que reconocía como supuesto que, ante la fuerza del pueblo organizado, con independencia de la estructura institucional burguesa, se dividirían por su misma composición clasista heterogénea. Se dejaba de lado en el análisis la gravitación que en su comportamiento podría ejercer su funcionamiento estamental.

La respuesta de la burguesía a la ofensiva de la izquierda fue precisamente provocar la definición de las fuerzas armadas como grupo de presión (que por su estructura interna determina un funcionamiento estamental, por lo cual los conflictos de clase son distorsionados por intereses de esta naturaleza). Los parámetros para tal definición estaban dados por la dualidad de poderes que entraba a cuestionar el sistema de dominación mismo del cual, obviamente, las fuerzas armadas son partes constitutivas...; dualidad de poderes que, en primer lugar, se expresaba en la propia descomposición del Estado Burgués más que en el surgimiento de una dualidad de poderes entre la burguesía y el proletariado. Lo trágico

de la situación consistía en que tal dualidad todavía no se planteaba en los hechos, aunque si, y con mucha fuerza, en el plano de lo ideológico, lo que bastaba para precipitar un pronunciamiento militar.

El intento final y definitivo para empujar tal definición lo representó el acuerdo de la Cámara de Diputados del 22 de agosto, que cuestionaba al gobierno por haber incurrido en "ilegitimidad de ejercicio" por abuso de poder.

De este modo aparece que la intervención de las fuerzas armadas obedece a su manipulación por los intereses de la fracción oligárquico-monopolista. No obstante no pueden desconocerse en su acción otras influencias derivadas de reconocer los militares tanto una pertenencia de clase como de estamento. En la medida que finalmente predomine esta última el carácter de su intervención será fundamentalmente militarista, entendiendo por tal una forma de actuar no necesariamente dependiente de los intereses de una fracción determinada de la burguesía.

Cuando escuchamos que en el proyecto político de los militares chilenos se incorporan elementos de rechazo a todo lo acontecido durante los últimos cuarenta años, esto es, a todo el periodo de vigencia del sistema

121604

de dominación demo-liberal, se está demostrando que se cuestiona a la propia política aliancista de la burguesía, postulándose ellos como sus reemplazantes.

Esta orientación anterior puede explicarse más por intereses propios en tanto militares que en su calidad de meros instrumentos de una fracción de clase. Lo que hace viable su alianza sucesiva con otras fracciones de la burguesía, incluyendo a sectores populares. Todo dependerá de si la unidad interna de las fuerzas armadas es compatible o incompatible con el predominio de unos u otros intereses de clase. Desde este ángulo la orientación definitiva de la gestión militar será el producto de la fórmula que mejor armonice el predominio de ciertos intereses de clase con su propia unidad institucional.

No es ajeno, naturalmente, a la orientación que asuma el gobierno militar la ayuda capaz de prestarle el capital extranjero y la actitud general del imperialismo, en la medida que puede contribuir a atenuar las tensiones que, inevitablemente, surgirán de seguirse una política al servicio estrecho de los intereses de la fracción oligárquico-monopolista, y que pongan en peligro la unidad institucional. A falta de esta ayuda una alternativa es la represión entre sus propios integrantes discrepantes y su vertiginosa transformación en casta administra-

dora de un sistema de dominación al servicio de la fracción pro-imperialista; o bien un vuelco de los militares que los aproxime a una orientación de corte populista. Dependerá de cómo jueguen internamente los intereses de clase: o se mantiene el bloque monolítico (en base a un sistema de cooptación), o se polariza según los diferentes intereses de clase representados en las fuerzas armadas.

De la exposición anterior desprendemos diferentes cuestiones que deben preocupar al estudioso de las Ciencias Sociales. Nos proponemos reseñar algunas de ellas como simple estímulo al debate intelectual, aunque sin desconocer sus implicaciones políticas (entendida la política como praxis y no como politología).

II. TEMAS PARA REFLEXION

Es posible ordenarlos en tres grandes grupos de acuerdo con su naturaleza y el papel que cumplen en la comprensión de los procesos sociales: las cuestiones de orden ideológico; las alianzas entre clases o fuerzas sociales; y las concernientes al sistema de dominación.

La táctica de la burguesía.

La burguesía basa su ofensiva en que la política de cambios del gobierno cuestiona la estructura del Estado como árbitro de intereses y, por lo tanto, es ilegítimo al impedir que los demás Poderes Públicos (especialmente el Congreso) puedan participar en las tareas de decisiones.

El principio de equilibrio de poderes siempre que la burguesía no pierda el control de ninguno de ellos (aunque accedan distintas fracciones de ésta) refleja un consenso ideológico acerca de las bases de legitimación del poder; pero en tanto se pierde el control político de uno de estos poderes constitutivos del Estado se pierde también dicho consenso ideológico y, en consecuencia, se llega a cuestionar las bases de la hegemonía. El único camino que encuentra la burguesía para encubrir el cerco institucional en torno del Poder Ejecutivo, y de esta manera neutralizarlo, es invocando el principio de las mayorías y trasladando el centro de decisiones hasta aquel órgano de poder donde ésta se exprese: el Congreso. De esta manera el equilibrio de poderes asume otra forma de desequilibrio, pero, ahora, en situación favorable para los centros bajo control de la burguesía.

La división de los poderes asume así su carácter encubridor de un control monolítico pero con delegación del poder, lo que es característico de la democracia. En

la medida que la fracción hegemónica de la burguesía mantiene el control de los centros de decisión puede corresponderse una delegación que, en lo formal, asume el aspecto de una proliferación institucional. Pero en cuanto se pierde dicho control la liberalidad anterior se cuestiona en términos de un consenso ideológico. De ahí que cuando burguesía pierde el control del Poder Ejecutivo no le resta más que cuestionarlo en virtud de un principio de unidad, que no descansa en ninguno de los demás poderes sino que en el centro informal del dominio indiscutido de una fracción sobre el conjunto de la clase.

Como la pérdida del control perjudica más profundamente a la fracción dominante, ya que las demás fracciones de la clase pueden reconocer intereses contradictorios con aquella, esta fracción necesariamente generaliza su particular situación de pérdida del control transformándolo en una crisis de toda la estructura institucional; estructura que es la forma cómo históricamente se han regulado las relaciones entre las distintas fracciones de la burguesía, y entre ésta y las otras clases. En consecuencia, el planteamiento de la fracción dominante de que se cuestiona al Estado como árbitro de intereses se proyecta hasta cuestionar la participación de cada fracción de clase en la estructura global del poder.

implantar una política de aglutinación de todas las fracciones mediante una política de movilización orientada a defender a la superestructura institucional, que determina, en un comienzo, que la estrategia burguesa adopte un acento mesocrático y el liderazgo ideológico lo ejerza la fracción político-populista.

Pero la manipulación de la fracción dominante sólo es posible cuando la dominación se ha basado en una alianza entre fracciones y no en un dominio directo y excluyente de aquella.

En efecto, las contradicciones entre fracciones de clase quedarán siempre subordinadas a sus intereses comunes cuando no se considere en la lucha la fuerza que adquiere la ideología que cohesiona a la clase. Esta ideología constituye el revestimiento de todas las fracciones en su lucha por no dejarse doblegar por las otras. Cada una pretende apropiarse de la ideología dominante para legitimar sus propios intereses. Debe comprenderse, sin embargo, que la ideología dominante, en los sistemas de dominación basados en alianzas, no es necesariamente muy coherente sino, por el contrario, más abierta a la cooptación de nuevos sectores con sus propias concepciones. En cierto sentido es mucho más sincretica que las ideologías de las dominaciones autoritarias y directas y, por lo mismo, su capacidad para absorber tensiones

estructurales es también mucho mayor.

La ideología dominante en un sistema de alianza está constantemente enriqueciéndose gracias a la influencia de todas las fracciones de la clase y de sus aliados. Por eso el poder real de la fracción dominante no se mide sólo desde el ángulo del poder económico que detenta, sino además en su capacidad de influencia ideológica. Si no se entiende esto no podrá aislarse al enemigo y, por consiguiente, por muy débil que se encuentra en el plano de los bienes materiales podrá reproducirse en el plano ideológico y mantener su alianza por sobre las contradicciones materiales que hacen posible su aislamiento.

Lo anterior es todavía más válido cuando la lucha de clases se desarrolla en condiciones de una sociedad en que la burguesía no ha sido desposeída de su poder ideológico (prensa, radio, incluso organizaciones sociales), y, por ende, conserva su capacidad para estructurar alianzas. Más aún, cuando es presumible que lo último que perderá será dicha capacidad. En esas condiciones su derrota supone que se deshaga su alianza ideológica de poder, lo cual se transforma en la principal tarea.

Lo anterior plantea teóricamente la relación que se entabla entre cambios a nivel de los medios de producción y los que ocurren en el plano de la manipu-

lación ideológica. En la totalidad de los procesos revolucionarios esta cuestión se ha resuelto mediante el ejercicio del poder total, que no es sino la supresión de las manifestaciones ideológicas por vía de una decisión política. Pero cuando ello no es posible, no en virtud de una decisión que opta entre varios caminos, sino, más bien, por una cuestión de viabilidad real, quedamos ante el hecho escueto de que se puede avanzar por la vía de los cambios económicos y simultáneamente retroceder por el de la consolidación política.

El proceso chileno plantea crudamente esta realidad dual. ¿Es posible derrotar a la burguesía penetrando en su propio castillo? Respuestas hay muchas y muy categóricas. En el caso de Chile la derrota del gobierno popular es quizá la más trágica. Pero siendo tal el hecho, cuál es su explicación? Queremos plantear que no hay ningún determinismo intrínseco al proceso que explique su desenlace, así como no lo hubo para explicar el éxito de la revolución cubana. Un proceso revolucionario está condicionado por un cúmulo de circunstancias mayores y, con gran frecuencia, por múltiples casualidades, casi insignificantes miradas desde una perspectiva histórica pero que deben ser canalizadas por una voluntad coherente: la dirección política. En verdad, así como los bolcheviques pudieron remontarse sobre los obstáculos e instaurar un poder revolucionario en Rusia, también así una falta de dirección política impidió que en Chile

un triunfo pudiera llegar a convertirse en revolución.

Estamos situados dentro de los márgenes de lo aleatorio y de lo casual. ¿Dónde se encuentra lo esencial que explique la concatenación de los hechos?

Dirección política y representación de la clase

No obstante que constituiría un simplísimo atribuir a la falta de dirección política la principal causa del fracaso, es con relación a la dirección política que nos planteamos la mayor cantidad de problemas teóricas.

Dejemos de lado por el momento el hecho de que existían dos partidos (el Partido Socialista y el Comunista) que pugnaban por convertirse en los verdaderos representantes de la clase, aunque en su actuar se apeaban estrictamente a los tradicionales moldes del clientelismo electoral; dejemos de lado la actuación de una cantidad de grupos que representaban la presencia autónoma de una pequeña burguesía radicalizada, que contribuyeron a hacer más difícil aún la tarea de estructurar una dirección política (es el caso del Movimiento de Acción Popular Unitaria, MAPU, la Izquierda Cristiana, el Partido radical, en menor medida); dejemos de lado la carencia de cuadros políticos capaces de manejar el aparato de ad

ministración del estado (o, en su defecto, adecuar el ritmo de los cambios a la formación de una vanguardia enquistada en dicho aparato; dejemos también de lado las desviaciones por ideologismos y subjetivismo, y, finalmente, las querellas por imágenes tales como ser o no ser revolucionario. Nos preocupan por el momento mas bien cuestiones que por su naturaleza son demostrativas de la ausencia de una comprensión real del fenómeno concreto, que constituyó la vía chilena al socialismo.

En particular dos son los aspectos que nos parecen interesantes: por una parte, el empleo del poder que se dispone para romper el poder de la burguesía; y segundo, la distorsión de los cambios que se promueven cuando permanece inalterada la gravitación de la ideología dominante. Ambos aspectos adquieren un relieve particular en el caso de la experiencia chilena.

Los dos aspectos guardan una estrecha relación, pues el poder no es sólo manipulación sino también constituye una imagen y, como tal, es también una fuerza cultural; lo mismo con los cambios en la estructura económica que no sólo afectan intereses sino también posiciones sociales en un sentido más amplio, especialmente cuando median entre los antagonismos sociales sectores sociales sin una clara ubicación clasista (el caso de los grupos medios). Todo lo cual no es sino el reflejo de que la clase social constituye un fenómeno total que incluye

tanto a las condiciones de base como las formas de expresarse en la superestructura. Desconocer estas características puede conducir a confundir el análisis de clase con el simple análisis de posición de fuerza medida unilateralmente.

El estado burgués como instrumento de poder revolucionario

El empleo del aparato de poder para romper con la ideología dominante exige una capacidad de los cuadros políticos para utilizar los mecanismos institucionales existentes, pero liberada esta capacidad de los compromisos culturales que implica el funcionamiento y uso de tales mecanismos. Así como Lenin dedicó gran parte de su esfuerzo teórico, preparatorio para la acción revolucionaria, a caracterizar la naturaleza del estado que debía ser destruido, lo mismo exigía un proceso revolucionario (como el chileno) que se enfrentaba a la necesidad de situarse dentro de la estructura del estado burgués. Pero su análisis debía situarse no sólo en los límites del horizonte leninista, sino en el marco del compromiso con el statu quo, es decir, plantearse el dominio de las pautas culturales que regían su funcionamiento. No se trata sólo de comprender la naturaleza represiva del estado sino, además, de penetrar en sus diferentes aspectos concernientes a su dinámica interna, entre los que cabe mencionar algunos como los siguientes: su relación como estructura burocrá

tico-institucional con la legitimidad de clases; el surgimiento en su interior de ciertos grupos sociales que, siendo instrumentos de dominio de la clase dominante, mantienen alguna autonomía respecto de ella; la tendencia, derivado de lo anterior, de que partes del conjunto del aparato del estado pueden evolucionar como grupos de presión; la posibilidad de articular dentro de su estructura institucionalizada un sistema informal de poder en base a centros de decisión, aunque fueran independientes uno del otro en el plano formal, etc.

La primera circunstancia que confiere especificidad al problema del Estado se refiere a que no es objeto de un ataque frontal por la clase obrera chilena y sus aliados, sino que ésta entra a su estructura posesionándose de ciertos resortes fundamentales del mismo. Se transforma el Estado en un verdadero campo de batalla entre las clases en pugna con lo cual el problema no es su "destrucción", como resultado de la derrota de la clase dominante por su antagónica, sino, más bien, su desarticulación (paralización) que se corresponde al proceso mismo de definición de la lucha de clases. De ahí que esta lucha no podía definirse ideológicamente en términos de la desaparición de ese Estado (por mucho que ese fuera el producto final de la lucha social entablada), ya que el contexto de enfrentamiento suponía obtener una desarticulación favorable a los centros de poder controlados ya desde dentro por las fuerzas populares.

Lo anterior se proyecta a que la política de cambios en el plano de la estructura económica exigía ser complementada con una doble política de alianza: con la burocracia, por una parte, y de neutralización de las FF.AA. como grupo estamental de la otra.

Con la burocracia porque a pesar de su condición de grupo instrumental de la burguesía (y en particular de la fracción dominante de ésta), fuertes sectores de ella eran capaces de desarrollar intereses autónomos. Como ilustración de su carácter instrumental podemos citar la división del Partido Radical en el Partido Democracia Radical y más tarde en el Partido Izquierda Radical que contribuyeron, por lo menos en el plano de las gestiones políticas, a dificultar cualquier posibilidad de entendimiento con la democracia cristiana; en cambio, como reflejo de su capacidad de autonomía respecto de la fracción dominante hay que citar la conducta del Partido Radical Cénista que permaneció hasta el final compartiendo responsabilidades en el gobierno.

La neutralización de las FF.AA., en cambio, planteaba el problema más complejo en la utilización del estado burgués como instrumento del poder revolucionario... En este sentido cabía desarrollar sus intereses institucionales, lo que procuró realizar el presidente Allende, pero sin el apoyo suficiente de los partidos (en particular del Partido Socialista), por lo que su intento no pudo tener la fuerza y coherencia indispensable. La única

posibilidad real que tenían las fuerzas populares era neutralizar las eventuales acciones militares haciendo armonizar sus intereses institucionales con la política general de cambios del gobierno. Más adelante volveremos sobre el tema.

Es indudable que algunos de estos problemas se pueden percibir con mayor claridad después de los sucesos del 11 de septiembre. Sin embargo, desde antes era claro que, en la medida que no se estaba en una estrategia de ataque frontal en contra del Estado, era imprescindible una política de alianza con los sectores sociales enquistados en dicho aparato. Mucho más todavía cuando se demostraba la falacia de que un militante de un partido político popular podía, por el simple hecho de ser tal, desempeñarse como un eficiente manejador de los mecanismos administrativos e institucionales disponibles. La contradicción entre roles políticos y administrativos nunca llegó a resolverse racionalmente, pues no se llegó a comprenderlo como un aspecto fundamental de la política estatal, es decir, de la utilización del poder institucional como parte del poder revolucionario.

Por el contrario, siempre se consideró que la racionalidad burocrática debía ser desterrada ante la imposición radical de la racionalidad revolucionaria (lo que en la práctica determinó una serie de conflictos innecesarios), en vez de enfrentarse a la primera como un instrumento imprescindible para el proceso. La incompreensión acerca de

las limitaciones de la burocracia, pero a la vez de su función indispensable para la coyuntura por la que atravezaba el proceso, condujo a un manejo del aparato del estado que, por su irracionalidad, ineficiencia y ligereza, muchas veces, sirvió de base para acentuar las imágenes contrarias al Estado que la burguesía promovía con el fin de desacreditarlo como mecanismo de control de sus intereses y de protección a los sectores dominados.

La esquizofrenia de la dirigencia política del movimiento popular de colocarse ideológicamente fuera de la institucionalidad del Estado, aunque objetivamente se estuviera dentro y utilizando sus mecanismos, produjo por una parte una incapacidad de acción efectiva del gobierno y, de otra, gestó en el plano de la ofensiva ideológica un cuestionamiento anticipado de toda su estructura y, por consiguiente, se precipitó un antagonismo con los grupos sociales que reconocían su base de existencia en ella (principalmente los burócratas y los militares).

Se tenía una comprensión ideológica de la naturaleza represiva del Estado, pero se carecía de una real comprensión de las implicaciones que acarrearía tener que utilizarlo para empujar la política de transformaciones. Lo que significó que la afirmación acerca de su naturaleza represiva en favor de los intereses de la burguesía se constituyó en un obstáculo para poder considerarlo un instrumento que podría ser puesto al servicio de los intereses populares, a pesar de que una parte del mismo había caído en manos de

estas fuerzas sociales. Por lo mismo se consideraba que su utilización se transformaba en un freno para aquello mismo que promovía; es decir, se suponía, fiel al análisis clásico, que ningún cambio podía ser real en tanto no se le destruyera, desconociéndose que, en la medida que se le utilizaba, implicaba de hecho una alianza con aquellos sectores que descansaban en su estructura y así poder separar los cambios socio-económicos de un cuestionamiento anticipado del sistema de dominación, es decir, antes que las fuerzas populares estuviesen capacitadas. En el fondo, el problema ideológico era separar el funcionamiento del aparato del estado de los intereses de la fracción de clase que eran afectados en la coyuntura. No hacerlo impulsado por apreciaciones esquemáticas del proceso, prescindiendo de las necesidades coyunturales, y considerándolo como un todo indivisible, era contribuir a afianzar la alianza ideológica de la burguesía ya que se forzaba una amenaza de todo el sistema de dominación.

Tal separación era posible por la existencia de fuertes contingentes de fuerzas enquistadas en el aparato del estado.

La existencia, por otra parte, de una fracción política populista facilitaba avanzar en la estructuración de un área de propiedad social y en la reforma agraria siempre que se le garantizara participar en el poder político

y que una mayor intervención del estado en la economía no atentara en contra de la subsistencia de la mediana y pequeña empresa; asimismo, que las transformaciones hacia una economía socializada no conllevaran una total transferencia del poder hacia el estado centralizado. He aquí el punto esencial de una alianza de clase que, al precio de una mayor lentitud en el avance del proceso, contribuyera a consolidar las nuevas estructuras de poder popular que necesariamente debían surgir de los propios cambios en la estructura de la economía y, por consiguiente, debilitar los intentos de la fracción oligárquico-monopolista por reagrupar sus fuerzas aliadas en torno de un interés común: la defensa del sistema de dominación.

Pero la separación mencionada era también necesaria desde el punto de vista de que los cambios en la estructura económica, cuando se impulsan en una sociedad en que los valores de la ideología dominante (como los principales instrumentos de manipulación para el ordenamiento de las fuerzas sociales) experimentan grandes distorsiones y se dificulta su legitimación. Por esto también se justificaba forjar una alianza como la señalada que permitiera distinguir entre los intereses de la fracción dominante y el sistema de dominación.

Cambios reales e imágenes ideológicas.

La defensa de la superestructura facilita la consolidación de la alianza ideológica de la burguesía. En este contexto la política económica del gobierno no produjo una polarización favorable, en la medida que no se orientó a romper la dominación de la ideología dominante. Su ruptura era fundamental para aislar a la oligarquía, pero es más lenta esta ruptura ideológica del bloque que la distorsión que la política de cambios estructurales experimente por efectos de la ideología dominante.

En efecto, los cambios que a través de medidas económicas se perseguía provocar en la posición de los grupos sociales, pueden ser neutralizados o transformados por influjo de la ideología dominante. Es así como una política de redistribución de ingresos puede generar mayores presiones sobre el consumo, dentro de los moldes impuestos por los estratos más altos ingresos. Por eso cuando se quiere determinar una polarización que sirva para ampliar el campo de las fuerzas revolucionarias, a través de una política de redistribución monetaria del ingreso, todo puede terminar en una mera revolución de las expectativas, especialmente respecto de las capas sociales más proclives a la movilidad social.

En el contexto de los cambios que producen efectos funcionales para la ideología dominante, pero difuncionales para el proceso de transformaciones, asume su importancia

la estructura de poder.

La importancia de la estructura de poder reside en que la única forma de frenar la inercia cultural dominante es la participación en el ejercicio del poder de los nuevos grupos sociales emergentes. En este sentido una de las principales tareas o funciones del poder popular (ya sea que se trate de la porción de institucionalidad vigente apropiada por las fuerzas populares, o bien de las nuevas formas de organización surgidas por efecto de la propia presión por participar) era orientar una lucha ideológica para superar la etapa de la economía de consumo y sustituir sus necesidades por otras a partir de la práctica de decisiones de los propios grupos participantes.

Sí atendemos a que la burguesía basaba su propia ofensiva en los valores de la economía de consumo y en la defensa del sistema de dominación (democracia), era fundamental la contra-ofensiva ideológica de la Unidad Popular. Su debilidad se explica en medida importante, no sólo por la carencia de una dirección única, sino también por otras causas de fondo. Entre estas cabe destacar la proporción de elementos pequeños burgueses incorporados en la dirección que hacían que ésta fuera fácil presa del subjetivismo e ideologismo. Desviaciones que donde mejor se expresaron fue exactamente en la forma de enfrentar a los nuevos embriones del poder popular.

Se llegó a definir a las nuevas estructuras de poder más como objetivos ideológicos, capaces por sí mismos de provocar los cambios necesarios de conciencia, que como instrumentos al servicio de una transformación. Así, por ejemplo, hablar de poder popular, o de contrapoder, sin atender al contexto económico en que surgía, a los grados de conciencia alcanzados por el pueblo, a la penetración de los valores dominantes en los sectores populares, a la naturaleza ideológica de la alianza de la burguesía, o a la necesidad de alianzas para demoler su bloque, lo transformaba de un hecho histórico fundamental, producto de una alteración favorable en la correlación de fuerzas, en una imagen ideológica carente de apoyo real, pero con suficiente fuerza para provocar el reagrupamiento del enemigo. Cuando decimos que no tenía suficiente fuerza material pero si mucha de índole ideológica, estamos apuntando a que la organización de la fuerza de una clase debe ser expresión fiel del grado de conciencia alcanzado y no de la situación en que el conflicto de clase se ha resuelto a través del triunfo final. Esto último es finalismo político.

No existiendo sino como proyecto ideológico, el poder popular se constituyó en la fuerza ideológica que catalizó la conciencia de clase de la burguesía y de sus distintas fracciones, mientras que los trabajadores y sus aliados, por la misma desorientación provocada por la multiplicidad de vanguardias políticas, representativas de sus intereses,

no se emancipaba en los hechos de cierta dependencia de una estructura institucional, maltrecha y maniatada, representada por el Gobierno. Efectivamente, a través de este continuaban canalizándose todas las decisiones en forma que la clase no pudo desarrollar sus propias formas de poder. Esta y sus formas de poder se desarrollaron con autonomía una de otra, de manera que su fuerza no se llegó a canalizar a través de aquellos canales, y estos aparentaron reflejar una fuerza que no poseían.

La raíz de lo anterior se encuentra en la confusión establecida por la dirección entre la fuerza de la clase con la fuerza de las vanguardias. Más claramente, la clase con el desarrollo de su conciencia política y la ampliación de su base material, representada en el crecimiento del área de propiedad social, reconocía posibilidades que se desvanecían por la liberación de representaciones políticas. Por eso es que la estrategia del poder popular al estar impulsada por los partidos, más como expresión de la disputa entre ellos, que como expresión de la clase, al confrontarse con la clase determinaba una contradicción entre ésta y el poder popular; contradicción que consistía en que el forjamiento de las nuevas formas de poder exigía la integración de las distintas representaciones políticas de la clase obrera y de sus aliados, lo que en la práctica no sólo no ocurrió sino que se mantuvo el proceso contrario. De esta manera las nuevas formas de poder se

transformaban en el campo de batalla de las "vanguardias." cada vez más alejadas de la masa de la clase. Y ésta en vez de convertirse en el real contenido de dichas estructuras de poder se limitaba a constituir la clientela social de varios grupos superestructurales empeñados en posesionarse del control de dichas estructuras, provocando su consiguiente burocratización.

El proyecto de creación de un poder popular, o de un antipoder, exigía pasar por una dirección unificada. De otro modo era anticiparse a una correlación de fuerzas que no era necesariamente favorable. El poder popular tampoco podía cumplir las funciones de correctivo ante las limitaciones que ofrecía el Gobierno, cercado institucionalmente, pues entraba de lleno a servir de catalizador para el proceso de unificación entre las diferentes fracciones de la burguesía, en razón de representar el peligro involucrado en un cuestionamiento al sistema de dominación vigente.

Por lo anterior, el poder popular no debía constituir el producto de un enfrentamiento contra el bloque cerrado de la burguesía, sino el instrumento de una alianza táctica cuyo objetivo fuera el fraccionamiento de dicho bloque.

Bloque y fraccionamiento de la burguesía.

No haber comprendido la dirección del movimiento popular

que ciertas fracciones de la burguesía podían comprometerse en cambios en la estructura productiva sin que ello significara dejarse arrastrar hasta un cuestionamiento de la institucionalidad (como era el caso de los sectores de burguesía enquistados en el aparato del estado y, en general, en la institucionalidad vigente), contribuyó a que el liderazgo de la fracción político populista fuera rápidamente reemplazado por el de la fracción más retardataria.

El problema de fondo consistía en que el proceso reconocía una fase primera de cambios económicos que sólo podían proyectarse a cambios institucionales mediando una alteración en la correlación de fuerzas; la cual para producirse requería que se rompiera la alianza ideológica de la burguesía. En este sentido la coparticipación en la dirección del proceso de la fracción político populista de la burguesía (representada en la Democracia Cristiana) reflejaba una etapa necesaria de alianzas: primero se planteaba la necesidad de romper la unidad de la burguesía, después la transformación de la superestructura.

El fraccionamiento con que enfrentó al proceso la burguesía abría un tiempo útil para crear las condiciones que aceleraran la consolidación de las estructuras del movimiento obrero, atomizado como fuerza organizada, aunque ideológicamente unitario en torno de la Central Única de Trabajadores, especialmente por el predominio del

Partido Socialista y Comunista. La Central Unica de Trabajadores (CUT) no disponía, a pesar de ello, de los instrumentos adecuados para pasar desde una actitud pasiva, con énfasis en el reivindicacionismo de sus acciones, a una etapa en que asumiera responsabilidades directivas y de administración de Gobierno, como se suponía lo exigía la transferencia de poder.

Fortalecer la unidad por la base y terminar con las rivalidades entre los partidos por ganarse a la masa de trabajadores sindicalizados y no sindicalizados, constituía una etapa previa para el surgimiento del contra poder popular capaz de antagonizar con la institucionalidad burguesa dominante.

La transformación de los sindicatos en instrumentos de gestión económica y administrativa, como de movilización unitaria, y el proceso de unificación con la base popular representada en el partido D.C., definían la necesidad de la alianza para lograr el fraccionamiento de la burguesía. Sin embargo, para ello era indispensable organicidad en la dirección política ya que sin ésta, no era posible transformar el área social de la economía y a los sindicatos en la base material y en los instrumentos, respectivamente, de un poder popular efectivo y no puramente ideológico; y, además, que no fuera tardío en su surgimiento respecto al proceso de consolidación de la alian-

za de la burguesía. No era posible sin unidad en la dirección porque los sindicatos eran preferentemente transformados en zonas de influencia de los diferentes partidos políticos, interesados en conservar sus clientelas a través de su control sindical.

El proceso chileno es demostrativo de cómo un proceso puede autodestruirse cuando su dirección política se ha convertido en una verdadera constelación de grupos de presión en permanente disputa. Es en esta perspectiva que debe entenderse el surgimiento del poder popular, como un producto del proceso de cambios, y no meramente como una solución de coyuntura ante el inminente desplome del aparato institucional controlado por las fuerzas populares.

Las fuerzas populares y la desarticulación del aparato estatal burgués.

Cuando el proceso revolucionario no destruye a la institucionalidad dominante, sino que se apropia de ella, en parte, como fue el caso de la experiencia chilena, la intensidad de la ofensiva ideológica es la que marca la intensidad y rapidez del proceso revolucionario y no las medidas que operan en el trasfondo económico. El uso eficiente que se haga de los recursos institucionales disponibles asume una importancia fundamental para impulsar al proceso

revolucionario. Se plantea como cuestión de fondo comprender que tales instrumentos, forjados precisamente para impedir su uso con fines revolucionarios, quedan sometidos a una doble racionalidad, que, si no se puede resolver, determina una anulación del cuadro político destacado para el cumplimiento de una cierta función. Precisamente la incomprensión de los límites que tales instrumentos planteaban y, a la vez, de su necesidad imprescindible influyó para que no se supiera y quisiera aprovechar todo su potencial. Lo cual sirvió para que se encubriera tal incapacidad de un revestimiento ideológico que partía del rechazo apriorístico de que ningún mecanismo del estado burgués pudiera cumplir una función útil. Con lo que se contribuyó poderosamente a un desconocimiento de la rutina burocrática cotidiana de tanta influencia en el forjamiento de una conciencia favorable para la gestión del gobierno, pero más que nada para deshacer la imagen de burocratismo e ineficiencia que promovía la burguesía en el contexto de su estrategia de descrédito de este.

El funcionario de gobierno (que se suponía que además constituía un cuadro político) era con frecuencia la encarnación misma de tal ineficiencia y burocratismo en aras de un ideologismo revolucionario que disfrazaba su inexperiencia y muchas veces su incapacidad.

El tema central que planteamos es la forma de re-

lación con el estado burgués cuando se alcanza el poder político, pero importantes centros de decisión quedan todavía bajo control de la burguesía. ¿Es imposible sobrepasar los límites definidos por su naturaleza represiva? ¿La política justa esta dada por la constitución de un contra-poder que se enfrente globalmente al estado, o bien por una política de alianzas con los sectores sociales ubicados en su complejo andamiaje institucional destacando sus intereses estamentales sobre los de pertenencia a clase? ¿Su destrucción (en el sentido leninista) debe ser parte de una política anti-burguesa, producto de la misma exacerbación de las contradicciones entre las clases, o más bien impulsarse a partir de la propia desarticulación que impulsa la burguesía para defenderse? ¿La llamada destrucción del estado es la condición necesaria para una definición en la lucha de clases, o, quizás, es un proceso que se va correspondiendo con el proceso mismo de dicha lucha cuando ésta tiene lugar dentro de la propia estructura institucional dominante? ¿Su destrucción por lo tanto la comienza la propia burguesía (a través del cerco institucional o del impasse institucional), lo que se traduce a un vacío de poder que necesariamente debe resolverse mediante una alianza con la fracción político populista de la burguesía (enquistada en la superestructura institucional)? ¿Si la desarticulación del aparato estatal persigue por parte de la burguesía la finalidad de crear las condiciones para que el impasse sea resuelto por el poder militar, es justa entonces la alianza con una

fracción de la burguesía para impedir que ante el desgarramiento del estado entre dos o más poderes, que se disputan su legitimidad, las FF.AA. se transformen en el poder re-articulador de la institucionalidad resquebrajada?

Tal vez uno de los vacíos teóricos más importantes puestos de relieve por la experiencia chilena es que junto a la teoría del estado el marxismo no ha desarrollado una teorización sistemática acerca de las Fuerzas Armadas consideradas como entidad autónoma. Su enfoque mecánico ha llevado a que se olvide cómo y de qué manera específica la condición de pertenencia a clase influye en el comportamiento de los grupos sociales cuando se interponen una serie de circunstancias intermedias. En el caso de las Fuerzas Armadas es claro que, reconociendo un comportamiento de clase, también es determinante de su conducta su condición de estamento, que, por lo general, queda subsumida en el análisis global de la clase. Lo mismo puede aplicarse a la burocracia definida como sector de la burguesía pero que desarrolla intereses propios.

El péndulo militar

Las FF.AA., mientras se mantienen como órgano dependiente de un solo poder del Estado y en tanto no se atente (ni siquiera ideológicamente) en contra de la estructura del sistema de dominación, que es su base de funcionamiento, queda determinada preferentemente en su comportamiento por sus inte

reses de carácter técnico profesional; pero en el instante que se crea en ellas la contradicción de depender de varios poderes institucionales (por efecto de la estrategia de la burguesía de provocar la desarticulación del aparato del estado, que se concreta con la aprobación de la ley sobre las tres áreas de la economía que coloca en pugna al gobierno y al congreso) entra a cuestionarse su propia cohesión interna, lo que se traduce en un predominio de su comportamiento como estamento pero en torno de valores ideológicos de la clase dominante.

La unidad del estado burgués se expresa en términos de esta alianza ideológica, por cuanto el predominio de sus intereses estamentales llevan a las FF.AA. a entrar en pugna con las propias formas de expresión de la burguesía que aparezcan cuestionando (aunque sólo sea ideológicamente) las bases del sistema de dominación del que son parte (es el caso de la Democracia Cristiana). Inevitablemente buscarán transformarse en la expresión de los intereses de clase e invocarán su condición de árbitros en las pugnas inter-burguesas. Las Fuerzas Armadas, instrumentos del estado burgués, actuando en consonancia con sus intereses estamentales, definen todo un campo de relaciones conflictivas con la propia burguesía, con excepción de la fracción oligárquico-monopolista que sólo exige un régimen autoritario y no de alianzas y concesiones recíprocas entre fracciones de la burguesía, o entre éstas y las fuerzas populares en emergencia. Por esto es fundamental entender la

dialéctica entablada entre los intereses de la condición de grupo estamental y los generales que son propios de la pertenencia de clase. El predominio de los primeros sobre los segundos define el carácter militarista en oposición al carácter de un fascismo clásico.

La estrategia de la doble obediencia impulsada por la burguesía permite que (a través de la defensa de su cohesión como grupo de presión) predomine en las FF.AA. su compromiso de clase en base a que garantiza la mantención de la estructura interna, piramidal y jerárquica. No se puede olvidar que paralelamente con la desarticulación del aparato del estado entre poderes en pugna, el Congreso y el Poder Ejecutivo, disputándose la obediencia de los militares, se comenzó a plantear por la izquierda, principalmente por el MIR (Movimiento de Izquierda Revolucionaria) la rebelión de los soldados en contra de la oficialidad reaccionaria.

El cuestionamiento interno de la jerarquía militar partía del supuesto de la existencia vigorosa de un poder popular autónomo con capacidad de ofensiva como para servir de base a un fraccionamiento de las FF.AA. En la medida que tales condiciones no se deban en la realidad, principalmente por falta de dirección política unificada, el cuestionamiento interno de la jerarquía no podía desembocar sino en un reforzamiento de su condición de grupo de presión.

En este sentido, la única posibilidad de impulsar una acción favorable al gobierno por parte de las Fuerzas Armadas era mediante un golpe interno de control, que contara con apoyo de las organizaciones populares; pero jamás esperar una polarización favorable bajo el estímulo de una nueva estructura de poder popular que surgía, pues ésta, al cuestionar a la estructura institucional, se transformaba en una amenaza al sistema de dominación, y, en consecuencia, reforzaba la condición de grupo de presión de las FF.AA.

La cuestión teórica era que mientras la Unidad Popular impulsó la política de preservar al grupo de presión (estamento o casta) para, a través del cambio del contexto socio-económico promover su reubicación y reorientación, la burguesía se esforzó para que se cuestionara la estructura interna misma de los Institutos Armados y de este modo lograr que mediante la defensa de su condición de grupo de presión se impusiera el compromiso de clase. Compromiso que, como lo hemos señalado, no involucraba necesariamente su plena identificación con la clase sino, más bien, asumir el rol de su representación política.

El cerco institucional promovido por la burguesía en torno del Poder Ejecutivo no podía conducir a nada si no era con apoyo de masas. Las masas organizadas y combativas estaban con el gobierno el cual (a través de los partidos) sin embargo no las dirige para romper el cerco. Las

transferencias de poder se predicán pero se producen con retraso. Mientras tanto la burguesía baraja desde el golpe hasta el compromiso programático, lo que no era sino expresión de su lucha interna entre las fracciones de la burguesía (la fracción oligárquico monopolista y la política populista).

Las posibilidades de división de las FF.AA. para impedir el golpe dependían de la capacidad del movimiento popular para entrar en alianzas con la fracción política populista de la burguesía, en forma de atenuar las amenazas a su preservación como grupo institucional. Pero ello no ocurre, primero, por la falta de dirección política que prescindiendo de la necesidad de alianzas tácticas en la etapa de consolidación del gobierno, impulsa acciones que precipitan la aglutinación de la burguesía, y, segundo, por la debilidad creciente de la fracción político populista para imponer su participación en la dirección del proceso; pero, fundamentalmente, por la creencia de sus dirigentes de que el golpe militar en caso de producirse haría viable una solución demo-liberal de orientación centrista.

La falta de claridad acerca de los intereses de clase en juego facilita que se imponga la estrategia de la fracción con mayor conciencia de clase. En estas condiciones la fracción oligárquico-monopolista se convierte en el apoyo de clase más activo para el golpe militar.

Desde este punto de vista los militares fueron un instrumento de la fracción más reaccionaria de la burguesía, lo que no significa sin embargo que el golpe mismo sea un reflejo exclusivo de tales intereses. Su dinamismo interno es un producto de su carácter instrumental de los intereses monoólicos, pero también de los intereses institucionales propios del carácter estamental de los militares. En la situación en que se producía el conflicto de clase en Chile, prácticamente sin mediaciones, cualquier solución centrista del conflicto exigía un apoyo militar ante la incapacidad de la fracción político populista para imponerse sobre el resto de la burguesía; apoyo que, además tenía que definirse en un contexto definido por las contradicciones que amenazaban la existencia institucional de las FF.AA.: aceptación o rechazo de los embriones de poder popular.

De esta forma en la actuación de los militares se combinaron tanto sus propios intereses estamentales como su carácter de instrumento de la fracción oligárquico-monopolista.

La nueva clase política

Sus intereses estamentales se reflejan claramente en su defensa institucional que no puede ser más que a través de la sustitución de la clase política de la burguesía por una nueva clase político-castrense.

Su carácter instrumental se demuestra porque el golpe se precipita para impedir una eventual alianza entre el movimiento popular y la fracción político populista, lo que era inminente si el gobierno convocaba a un plebiscito. Creer en un golpe centrista era desconocer que los militares actuaban por intereses propios amenazados, no solamente por los cambios institucionales impulsados por el gobierno, sino también por la debilidad de la fracción político populista para neutralizarlos. En este sentido el éxito alcanzado por la fracción oligárquico-monopolista ha sido completo. Está por verse todavía la evolución futura de la situación militar, según como vayan dominando en su conducta la dimensión estamental o la condición de instrumentos de clase. El síntoma clave para apreciar su transformación que experimenten en uno u otro sentido, será la creación o no por parte de los militares de su propia tecnocracia.

Algunos errores

A manera de síntesis podríamos destacar dos grandes errores del movimiento popular: en primer lugar, la incapacidad de su dirección política de reconocer el carácter de grupo nexo de la Democracia Cristiana, esto es, su papel de aglutinador de alianzas de sectores medios y populares para vigorizar las bases sociales del sistema de dominación, pero que, en tanto tal, desarrollaba fuertes contra-

dicciones internas como lo demostró al haber roto, en un momento, la propia alianza dominante de la burguesía. En este plano el análisis de la dirección popular fue enfatizar su carácter de legitimador del statu quo, lo que determinó su tratamiento en bloque contribuyendo a cohesionarla internamente (como partido) y a estimular la política secretaria de los partidos populares en sus relaciones con la base popular demócrata-cristiana. Los intentos que se hicieron para polarizarla internamente, de acuerdo con los intereses de clase representados en ella, desconocieron la gravitación que ejerce sobre la condición de clase del militante la estructura partidaria a la cual está afiliado.

El segundo error fue no evaluar la correlación interna de fuerzas en las FF.AA. en el contexto de un movimiento popular cuya dirección ofrecía claros signos de estar dividida, lo que impedía de hecho una movilización popular efectiva en términos de contra-poder. La apreciación de la burguesía de impulsar un putch interno a las FF.AA. en las condiciones de un movimiento popular dividido estratégicamente, fue mucho más exacto.

Hemos sostenido que el poder popular debía ser el producto de la ofensiva ideológica del proceso revolucionario y concretamente de una etapa de alianza de clases. En su lugar se transformó en un producto ideológico de la pequeña burguesía dirigente, pero con mucho más imagen ideológica que estructura orgánica. De ahí porque pensamos

que su influencia se hizo sentir mucho más como elemento de advertencia en el campo de la burguesía que como el elemento movilizador para la clase obrera y sus aliados.

La verdad es que, no obstante su creación purista, la división interna entre los partidos del movimiento popular determinó un retraso en la transferencia de poder desde las estructuras institucionales a las formas nuevas que se basaban en la creación del Área de Propiedad Social. Este atraso fue decisivo para que no se desplazara la lucha de clases hacia un plano ajeno a la ideología dominante que permitiera la elevación a conciencia de las nuevas prácticas de dirección. [Por el contrario, se disoció la praxis concreta de los trabajadores del ejercicio del poder político, facilitando que la política del gobierno, orientada a fortalecer su base de apoyo, se redujera a la creación de una masa de apoyo pero sin llegar a plasmar dicha masa en una fuerza orgánica.] Un ejemplo de lo que decimos es la gran capacidad de movilización que demostró la Unidad Popular (recordemos las grandes concentraciones callejeras) y la ausencia de resistencia organizada contra el golpe militar.

La falta de organicidad real fue sustituida por la hipertrofia de imágenes que, en el fondo, hacían el juego a la burguesía precipitando una polarización favorable a sus intereses. En este sentido la ausencia de una correspondencia entre las medidas de organización de la

fuerza social y la política de comunicaciones de masa, orientada a crear simples imágenes sin un fundamento en los hechos, contribuyó a fortalecer a la alianza ideológica de la burguesía y a aislar al proletariado.

La no participación en la estructura de poder popular de las capas medias como instrumento en el manejo del estado contribuyó también a dicho aislamiento y a que no se fraccionara el bloque de la burguesía. La fundamentación acerca de la necesidad de que dichos sectores sociales medios participaran, se encontraban en la conveniencia de mantener las formas de legitimación en forma de impedir la aglutinación ideológica de la burguesía por un brusco quiebre en los patrones de legitimación del poder.

En términos generales uno de los temas más importantes para ser rescatados del proceso chileno es que ninguna coyuntura fue aprovechada para desarrollar efectivamente nuevas formas de poder, desterrar la influencia de los grupos instrumentales de la burguesía y forjar acuerdos tácticos orientados a provocar su fraccionamiento.

La falla en los análisis de clase que siempre consideraron a la burguesía como un bloque, la exagerada importancia concedida a las medidas económicas, que resultaba de no comprenderse la naturaleza esencialmente ideológica de la alianza burguesa, lo que por si mismo distorsionaba los efectos de las medidas de política económica, y la ca-

rencia de una dirección capaz de ser flexible tácticamente, entre otros factores, contribuyó a lo que apuntamos.

Es el caso de la crisis de octubre de 1972 en que se pudo gestar toda una estructura de gestión económica, especialmente de distribución que reemplazara a la vieja y tradicional capa de burócratas, o bien encerrarla en nuevas condiciones de funcionamiento. Por el contrario, en cada coyuntura de enfrentamiento tajante se empujó a que la burguesía desplazara sus centros de decisión hacia el poder gremial, que involucraba un mayor grado de su cohesión interna, y nunca se explotó su debilidad objetiva (en particular durante el primer período en que se reorganizaba) hasta provocar una crisis de hegemonía.

No es extraño, en consecuencia, que la profundidad de las medidas de transformación (creación del área de propiedad social, reforma agraria, etc.) no se proyectaran hasta un cambio en las formas de movilización de las masas, que, por lo general, se mantuvieron dentro de los moldes de una movilización electoral (pasiva); y, en esa medida, no se estimuló a los nuevos grupos para que se capacitaran en el ejercicio del poder y que una nueva legitimación surgiera en reemplazo de la detentada por la burguesía (1).

(1).- Transformándose a los "sectores medios" en administradores de la legitimidad en el período que durara la alianza entre las fuerzas sociales.

Lo anterior es resultado de la falta de percepción de la importancia de lo ideológico en el comportamiento y alianzas de las fuerzas sociales y de que los partidos no fueran capaces de romper con los moldes de movilización que les aseguraban sus clientelas de influencia, lo que es una consecuencia de la imposición de los intereses partidarios sin atender a las exigencias planteadas por el movimiento de masas.

En un momento el proceso exigió para avanzar la fusión orgánica de los partidos. Al no ocurrir tendió inevitablemente a su auto-destrucción.

El 11 de septiembre de 1973 representó así un fracaso posible de evitarse. Pero también constituyó una demostración de la imposibilidad de que el capital internacional pueda continuar aliándose con la burguesía interna dentro del marco de un sistema de dominación democrático liberal. En este sentido es también la crisis de la fracción política populista de la burguesía, que en el transcurso de los últimos decenios desarrolló sus propios intereses, muchas veces en contradicción con los industriales, financieros, agrarios o comerciales, y, en consecuencia, implica su reemplazo por una casta político-centrense.

La irrupción del movimiento popular fue posible por la política de alianza y concesiones que la clase política-liberal promovía como respuesta a las presiones de la

clase obrera. La derrota del movimiento popular conlleva también su derrota, pues se abre un período de dominación castrense que contiene en sí las posibilidades de crear las condiciones para una dominación directa de la fracción oligárquica-monopolista de la burguesía pro-imperialista, como también la transformación de los militares en la nueva clase política, ya no liberal sino autoritaria y, por lo mismo, detentando una mayor capacidad de cohesión entre la fracciones de la burguesía.

Su análisis debe constituir la preocupación de otro trabajo.